EDUARDO ESTRADA

Falso amigo

ANTÓN COSTAS

El presidente Mariano Rajoy se ha afanado estos días por tierras gallegas en cultivar la amistad de Angela Merkel. Aprovechó las caminatas, los fogones y la intervención del santo Apóstol para lograr su respaldo a una mayor presencia política de España en las instituciones europeas. Y parece que lo ha logrado. Está bien. Nos conviene.

A cambio, la canciller le ha pedido su apoyo a la política de austeridad que defiende el Gobierno de Berlín. Un apoyo importante, ahora que Italia y Francia muestran dudas y recelos.

La amistad de la señora Merkel conviene al Gobierno. Pero no es buena para la salud de la economía. Entiéndaseme bien. No tengo animosidad alguna contra la canciller. Todo lo contrario. Me gustan sus virtudes como gobernante: su proximidad, su ausencia de boato en el ejercicio del poder, su honestidad. Lo que no me gustan son sus políticas.

Con la política europea de austeridad pasa una cosa curiosa. No es posible encontrar ningún dato objetivo que la avale. Pero, aun así, tiene apoyos. Especialmente, el de las élites financieras y de grandes corporaciones multinacionales. A los que les van bien las cosas, les gusta la austeridad..., pero para los otros, no para ellos.

Pero, como le dijo en una ocasión Sherlock Holmes a su amigo y colaborador Watson, hay que ir con cuidado al hacer teoría sin antes ver los datos. Y si se miran los datos, no se encuentran razones para apoyar la teoría de la austeridad expansiva que sostiene Merkel.

Al contrario. Todo en la economía europea empeoró desde que, a mediados de 2010, cuando, coincidiendo con la aparición del problema de la deuda griega, el Gobierno alemán impuso por la vía de hecho la política de austeridad en Europa. La economía recayó en una segunda recesión que duró tres años. El paro se disparó. La deuda pública aumentó. El déficit público se resiste a ceder. La deflación de precios es como una soga sobre las familias endeudadas. Y, para colmo, el euro se aprecia dificultando las exportaciones.

Nada de esto sucedió en Estados Unidos ni en otro país no europeo. La recesión de 2011-2013 fue, por tanto, una crisis autoinfligida por la austeridad. Pero también por la incapacidad del Banco Central Europeo para cumplir con su objetivo legal de mantener la inflación en el 2%.

Las malas noticias no han terminado. La economía europea amenaza con entrar en una tercera recesión. Italia ya lo ha hecho. Francia está al borde. Y Alemania se acerca. El riesgo es ahora una segunda década perdida. Algo va mal en la UE.

A la hora de buscar datos positivos, algunos los ven en el hecho de que haya inversores que quieren comprar deuda española casi sin cobrar intereses. También ocurre en otros países. Eso es precisamente la señal de que la economía va mal.

Draghi pide a los Gobiernos nacionales que hagan reformas duras, pero no cumple con su obligación

Como los inversores no encuentran proyectos rentables en el sector privado y ven el futuro de la economía con incertidumbre, prefieren invertir en bonos públicos, poco rentables pero seguros.

Algunos dirán que es por falta de reformas. Pero la economía alemana también va mal. No son las reformas, que en todo caso son necesarias. Son las malas políticas. Cuando Mario Draghi pide a los Gobiernos nacionales que hagan reformas duras, alguien tendría que recordarle que el BCE no cumple con su obligación. Y lo mismo vale para la Comisión Europea.

La causa del malestar es que la austeridad es un falso amigo. Es una idea aparentemente sensata, pero peligrosa por el momento y la forma como se aplica. Con un sector privado nacional sobreendeudado y anémico, y unas exportaciones que sufren un euro fuerte, la austeridad perjudica seriamente la salud de la economía y de la gente. Nos lo dice la evidencia cotidiana, pero también está bien documentado en la investigación académica, la del FMI y de la OCDE.

El principio clínico del *primum non nocere* (primero, no hacer daño) recomienda que cuando una medicina hace daño, hay que dejar de aplicarla. Ese principio vale también para las políticas.

¿Por qué, entonces, las autoridades europeas se obcecan en perseguir políticas irracionales e insensatas cuando existen otras mejores disponibles? No hay una única razón. Pero en buena parte es por el apoyo de las élites económicas. Como sostiene Mark S. Mizrucchi *(The fracturing of the American corporate elite)*, a diferencia de lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, las élites actuales no tienen una ética de responsabilidad civil ni un compromiso entre sus propios intereses y los nacionales. Ignoran que la economía de mercado sólo funciona si está arraigada en una sociedad próspera y en un buen gobierno.

¿Cómo desprenderse de este falso amigo? No será fácil. El conocimiento económico tiene límites a la hora de influir en las políticas, y tampoco veo razones para esperar que el Gobierno alemán cambie. La debilidad económica de los demás países, incluida Francia, favorece el ejercicio de su hegemonía política en Europa. Tampoco creo que los demás Gobiernos nacionales, como el de Renzi en Italia, se atrevan a romper abiertamente con esa política, a pesar de que sus electores se lo piden.

¿De dónde pueden venir los impulsos para el cambio? De la presión de la sociedad civil y de las políticas de la UE. Los partidarios de la integración deben recordar que su legitimidad social, su núcleo moral, no está en conceptos como competitividad o eficiencia, sino en su capacidad para ofrecer oportunidades de mejora a los ciudadanos, especialmente a los que más lo necesitan. Las políticas europeas quiebran esa legitimidad porque perjudican a los más débiles. Reconstruirla debería ser la prioridad de la nueva Comisión Europea, que ha de comenzar a funcionar estos días. ■

Antón Costas es catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona.

EL PUNTERO

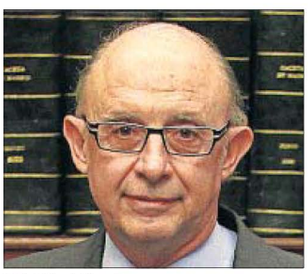
● El precio que más puntúa en AENA es el que no se paga

El pliego para la selección de los socios estables de AENA a los que se venderá un 21% del capital solo concede una puntuación máxima del 10% del total al sobreprecio que estén dispuestos a pagar los inversores sobre el de la oferta pública de venta (OPV) que supondrá su salida a Bolsa. En cambio, se puntúa con hasta un 41% del total el *cap* o precio máximo presentado, pero ese precio no es el que se pagará porque el precio final real será el que se fije para los inversores institucionales en la salida a Bolsa, esto es, un precio de mercado más la prima. Así, el diseño del pliego contiene un incentivo a que los inversores que quieran ganar inflen sus precios máximos a sabiendas de que no tendrán que pagarlos. Su riesgo en ese caso es dar por bueno el precio de la OPV antes de conocerlo.

José Manuel Vargas.

● El déficit del Gobierno central aún empeora

El déficit de la Administración central del Estado se redujo hasta julio del 3,60% al 3,08% del PIB. Eso son 4.800 millones de euros. Pero, al tiempo, el saldo de la Seguridad Social ha empeorado en 6.400 millones, con lo que el resultado global del Gobierno de Mariano Rajoy es que en los siete primeros meses del año el déficit aumenta en 1.600 millones. El aspecto de las cuentas de la Seguridad Social es especialmente preocupante. Las tarifas planas, los contratos a tiempo parcial y las menores cotizaciones por las bajadas salariales lastran los ingresos. Aunque el Gobierno intenta explicar el deterioro en un menor ritmo de transferencias del Estado, las cifras le desmienten. Eso solo explica una pequeña parte del empeoramiento.



Cristóbal Montoro.

● Mientras tanto, Merkel bate récords de popularidad

La persistente crisis económica está haciendo sufrir electoralmente a los Gobiernos europeos, pero para la canciller alemana Angela Merkel todo son rosas. Según la última encuesta mensual de la agencia Infratest Dimap para la televisión pública ARD, el 59% de los alemanes está "de acuerdo o muy de acuerdo" con el Ejecutivo de gran coalición, frente a un 39% "en desacuerdo o muy en desacuerdo". El Gobierno nunca ha sido tan popular desde la llegada de Merkel, en 2005. Personalmente, el 74% de los alemanes está de acuerdo con la canciller, frente a un 25% en contra. La pregunta es qué incentivos tiene la canciller para cambiar su política económica, con tal apoyo de su electorado. ■